

Cronologías
Enero – abril 2003

Luchas sociales y “neoliberalismo de guerra” en América Latina¹

Por Clara Algranati

Crisis de legitimidad y vientos de resistencia

A diferencia del inicio de la década de los '90, cuando el modelo neoliberal parecía extenderse a toda la región latinoamericana como horizonte único, hoy resulta difícil desconocer la profundidad de la crisis de legitimidad que lo cuestiona. Estos cuestionamientos expresan, y son el resultado, de aquellos procesos de condensación de luchas sociales que, en los últimos años, han enfrentado y resistido políticas concretas que forman parte de este recetario económico-social. Un gran número de pueblos y geografías de la región se han visto sacudidos por estos significativos momentos de confrontación social que, en algunos casos, desencadenaron profundas crisis políticas, haciendo tambalear e incluso hasta derrumbar gobiernos luego de que éstos intentaran llevar adelante privatizaciones, aumentos de precios o recortes salariales. En números anteriores del *OSAL* hemos abordado estas experiencias de conflicto social que claramente

podemos pensar bajo estos términos, entre ellas la "Guerra del agua" en Cochabamba en 2000, la revuelta indígena en Ecuador en el mismo año, y el "argentino" en diciembre de 2001, tan sólo para mencionar algunas.

En estas coyunturas observamos una retirada radical del apoyo pasivo a gobiernos elegidos democráticamente, cuando éstos asumen el recetario neoliberal y se disponen, cada vez de manera más previsible, a dilapidar su capital político en tiempos abreviados y al calor de la manifestación popular. En este sentido, este primer cuatrimestre del año 2003 no se distancia de estas tendencias –que venimos reseñando en esta sección de la revista– respecto a la importancia cualitativa y cuantitativa de las luchas sociales que protagonizan los habitantes de la región de América Latina.

Así, por ejemplo, en febrero de este año una crisis política de inmensas proporciones atraviesa el territorio andino boliviano cuando diferentes sectores sociales organizan su oposición al decreto presidencial de reforma del Presupuesto General de la Nación. El decreto aplicaba un impuesto a los salarios del orden del 12,5% y obedecía al requerimiento del FMI de reducir el déficit fiscal. La reacción popular ante esta medida es inmediata. En primer lugar se expresa el repudio y la resistencia de los sectores campesinos que defienden el cultivo de la hoja de coca, quienes vienen enfrentándose diariamente a una intensa represión por parte del ejército. Rápidamente se suman maestr@s, trabajadores de la salud, estudiantes secundarios, universitarios, comerciantes y las poblaciones pobres de La Paz y otras ciudades del interior. Entre el 11 y 12 de febrero se amotinan los principales destacamentos policiales del país. En masivas puebladas los bolivianos exigen la renuncia del presidente mientras se producen enfrentamientos entre la policía y el ejército. La salvaje represión desatada por el gobierno, que contó con francotiradores apostados en edificios públicos, deja un saldo de 35 personas muertas y más de 200 heridos (ver sección Análisis de casos en el presente OSAL).

Por otra parte, en la misma dirección podemos señalar las dificultades que encuentra el presidente Toledo en Perú para diferenciarse del "fujimorismo" sin variar el rumbo de las políticas económicas que su gobierno promueve. Este caso nos trae a la memoria las circunstancias políticas vividas bajo la gestión del presidente De la Rúa en Argentina cuando –habiéndolo ganado las elecciones apelando al "antimenemismo" que la sociedad ya había conquistado– continuó, una vez asumido el gobierno, por sobre los pasos de su predecesor, profundizando su política. Similitudes que nos señalan en qué medida estos procesos suelen ser veloces y comienzan a experimentarse rápidamente una vez acabada la fiesta de asunción y cuando las noticias de diarios y televisoras no pueden ocultar la concreción de políticas que discurren en las líneas ya recorridas y que han evidenciado ostensibles fracasos.

En respuesta al rumbo adoptado por el gobierno de Toledo las manifestaciones y huelgas del sector público, sobre todo el docente, son continuas, fundamentalmente en reclamo de un aumento del presupuesto de las áreas sociales. En algunos casos la reivindicación que plantean los sectores movilizados hace explícita su oposición a la política neoliberal del gobierno, mientras que otras veces expresan importantes niveles de convergencia bajo la forma de paros regionales. Sin embargo, el conflicto de mayor extensión en el tiempo durante este primer cuatrimestre del año lo protagonizan los campesinos cocaleros que se oponen a la erradicación de sus cultivos.

Estos hechos brevemente reseñados de Bolivia y Perú dan cuenta del “sobrevolar de una crisis” que, si bien no imposibilita recomposiciones políticas al interior de los estados nacionales en términos de la continuidad del modelo, renueva rápidamente malestares populares que le imprimen a la “governabilidad neoliberal” una dificultad creciente para alcanzar niveles de estabilidad. Por otro lado, al calor de estos procesos, los movimientos sociales más dinámicos de la región han ido forjando un balance crítico sobre las consecuencias sociales de la aplicación del recetario neoliberal así como también respecto de las repetidas formas bajo las cuales éste se traduce en políticas concretas que afectan a las mayorías. Así, esta experiencia social funciona como un límite difícil de sobrepasar cuando se intenta profundizar rumbos contra la voluntad de la población.

En términos de la evolución de la conflictividad social, si nos detenemos en las cifras totales de los conflictos relevados por el OSAL, el aumento más significativo a lo largo de los diez cuatrimestres trabajados (2000/2003) lo encontramos en los períodos enero-abril y mayo-agosto de 2001, cuando los registros aumentan más de un 60%. Luego las variaciones son mucho menores y los hechos de conflicto relevados oscilan entre 1.870 (septiembre-diciembre de 2001) y el promedio de 2.240 registros en el período que va de enero de 2002 a abril de 2003. Si, por otra parte, comparamos este primer cuatrimestre del año 2003 con igual período del año 2001, vemos que los registros obtenidos aumentan un 83,6% en sólo dos años. En este ciclo los hechos de protesta registrados en los 19 países de la región considerados durante el primer cuatrimestre de 2003 alcanzan la cifra de 2.242, superando a los del último cuatrimestre de 2002 en un 7,4%.

En un intento por enunciar algunos de los sentidos que las sociedades latinoamericanas están gestando, pondremos en consideración las principales experiencias que el proceso social delinea durante el primer cuatrimestre del año 2003.

Profundización del ajuste y la ampliación de las coaliciones sociales

Los datos del OSAL para este período muestran un importante aumento de las protestas "multisectoriales", donde más de un sector social articula su acción en base a objetivos comunes. En este tipo de protesta los actores involucrados hacen presentes reivindicaciones de carácter político en más de la mitad de los casos.

Respecto al mundo del trabajo asalariado hay una importante disminución de los conflictos que protagonizan los trabajadores del sector privado. Sin embargo, en el sector público, y especialmente en el sector docente, seguido por el de los trabajadores de la salud, el incremento de las acciones de protestas es significativo, así como también la capacidad que tienen los maestros para rápidamente asumir su forma ampliada de "comunidad educativa" y de esta manera extender su red de solidaridades.

Por ejemplo, en Guatemala, donde los registros de protesta aumentan un 121% respecto al cuatrimestre anterior, los docentes protagonizan un proceso de acumulación de fuerza social sin precedentes en los últimos años, y se transforman en actores capaces de involucrar a toda la sociedad. Comenzando por alumnos y padres –quienes participan desde el principio del conflicto– hasta alcanzar a distintos sectores gremiales, de derechos humanos y campesinos, que van posicionándose a lo largo de los días, todos juntos colocan al gobierno en la situación de ceder a las demandas planteadas. Los maestros alcanzan un aumento salarial y el compromiso de las autoridades de considerar el resto de sus demandas. Pero quizás uno de los rasgos más llamativos –y que por supuesto incide en el resultado del conflicto– es la capacidad del sector docente de impulsar a otros sectores a hacer propia una resistencia cuya fuerza radica en un valor social, en "la defensa de la educación pública". El proceso en Guatemala señala cómo estos conflictos logran importantísimos niveles de adhesión y solidaridad en muy breve tiempo, mostrando una capacidad de articular la defensa de más de un derecho elemental como el derecho al trabajo y el derecho a la educación.

A nivel regional se destacan también las protestas de los trabajadores de la salud que recogen amplios niveles de adhesión, aunque en términos de la cantidad de registros son menores en relación con las mencionadas anteriormente. Un ejemplo notable lo encontramos en El Salvador, donde estos trabajadores realizan una huelga en contra de la privatización del sector impulsada por el gobierno y solicitada por el FMI como condición para la firma de una carta de intención. Luego de enfrentamientos y la detención de activistas de las organizaciones sindicales, la policía nacional ocupa los principales hospitales y restablece el servicio con médicos contratados especialmente para terminar con la medida de fuerza.

En República Dominicana la oposición al ajuste es de tal magnitud que hace retroceder al gobierno en sus intenciones, mientras que en Honduras una serie de medidas que afectan al sistema público de educación y salud –algunas de las cuales son tomadas por el Ejecutivo luego de la visita de una delegación del FMI– produce una seguidilla de manifestaciones. Por otra parte, también en Nicaragua, asalariados del estado y estudiantes convergen en la protesta contra las medidas de ajuste sobre la salud y la educación. La continuidad de las movilizaciones estudiantiles hace retroceder en parte al gobierno.

Por último cabe señalar el aumento respecto al cuatrimestre anterior de las protestas protagonizadas por campesinos o por pequeños y medianos propietarios rurales. Se destaca aquí el caso de México, donde se articulan amplios sectores del campo en la lucha contra los efectos del TLCAN –y particularmente de su capítulo agropecuario– que comentaremos en mayor detalle en el último punto de este artículo.

“Virajes políticos” y Movimientos Sociales

Coincidiendo con los comienzos del año 2003, la asunción del presidente Ignacio Lula da Silva en Brasil señala el inicio de un ciclo de recambio de gobiernos que prometen “virajes políticos” o la adopción de políticas no neoliberales. Ya a fines del año 2002 la elección de Lucio Gutiérrez en Ecuador (ver el artículo de Ángel Bonilla y Ana María Larrea en este número de la revista), contando con el apoyo de una articulación de movimientos sociales de los más dinámicos de la región, como es el movimiento indígena, planteaba un similar horizonte de esperanzas. En el mismo sentido, la tradición del Partido de los Trabajadores (PT) como una herramienta política que ha servido para expresar demandas surgidas de movimientos sociales significativos de la región como la CUT y el MST, da cuenta también de un cuestionamiento al modelo capaz de construir alianzas exitosas en términos electorales. Sin embargo, es importante señalar que siempre estos movimientos han reivindicado su autonomía respecto de los partidos políticos, incluso del PT.

Este nuevo escenario supone la participación de dirigentes provenientes de los propios movimientos sociales en alianzas electorales que llegan a ser gobierno y que presentan importantes niveles de heterogeneidad política. Las tensiones que esta situación plantea repercuten rápidamente en los propios movimientos, impulsándolos a abrir importantes debates en torno a las políticas gubernamentales y su posicionamiento frente al estado. En este sentido cabe destacar que en estos cuatro primeros meses de 2003 el conflicto social en estos países, lejos de disminuir, aumenta un 50% en Brasil y un 98% en Ecuador respecto al último cuatrimestre del año 2002. Es por ello que resulta muy importante examinar atentamente cómo, en estas situaciones, se produce

la relación del movimiento social con el gobierno, la política, la autonomía y la construcción de alternativas.

En Ecuador esta cuestión aparece con claridad en la multiplicación a gran escala del debate que impulsan los movimientos indígenas a propósito de la posición respecto al nuevo gobierno del cual forman parte. Una primera conclusión de ello resulta con la ruptura del Ecuarrunari (Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador) con el gobierno, hecho que se produce finalmente el 24 de abril cuando esta organización indígena se declara independiente del mismo. Uno de los detonantes del retiro de la confianza popular es el paquete de medidas económicas que implica un aumento promedio del 35% en los combustibles, el congelamiento del gasto público y una reducción del 20% en los salarios de los empleados públicos, entre otras medidas que Gutiérrez promueve en consonancia con las exigencias del FMI.

Por otra parte, en Brasil, las primeras protestas contra las políticas promovidas por el nuevo gobierno vienen de la mano de los servidores públicos y de los profesores universitarios que se oponen a la reforma previsional impulsada por Lula, así como también a la privatización del Banco Nación, que podría causar 40 mil despidos.

Respecto a esta cuestión, podemos señalar también cómo los discursos que refieren al "suceso político", al "cambio" o la "transición política" en Brasil resuenan y son resignificados en el escenario internacional proyectando un optimismo propagandístico que, ante la ausencia de alternativas políticas efectivas, resulta en la exportación de una referencia ambigua para el resto del cono sur y también para los países andinos.

Por otro lado, en Venezuela encontramos la polarización ideológica y política de expresión más aguda de toda la región, donde los niveles de confrontación ocasionados por el paro cívico nacional impulsado por la Coordinadora Democrática (CD) aún no permiten saldar la grieta abier-

"...en estos cuatro primeros meses de 2003 el conflicto social (...) lejos de disminuir, aumenta un 50% en Brasil y un 98% en Ecuador respecto al último cuatrimestre del año 2002"

ta cuando los mismos sectores planificaron un golpe de estado para derrocar al presidente electo Hugo Chávez. Esta vez los sectores opositores en paro suben la apuesta, instando a la población a que se declare en desobediencia tributaria y deje de pagar los impuestos. Durante enero se suceden manifestaciones a favor y en contra del gobierno que dejan un saldo de tres muertos y varios heridos, para cerrar el ciclo el 1º de febrero, cuando la CD, la CTV y FEDECAMARAS deciden levantar el paro.

Posteriormente el gobierno lanza una ofensiva en varios frentes que se plasma en la creación, a principios de abril, de la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela (UNTV), con 56 federaciones regionales y 14 sindicatos nacionales cercanos al gobierno, sumando cerca de un millón de trabajadores. En el mismo sentido, en abril, el presidente Chávez ordena al ejército y a la guardia nacional apoyar la ocupación de tierras pertenecientes al estado por parte de los campesinos, en el marco de la reforma agraria que se lleva adelante.

En el escenario global en el que está instalado el conflicto venezolano, cabe destacar el hecho político que significó el viaje del presidente Chávez a Brasil a fines de enero –cuando aún el paro cívico impulsado por la oposición no había terminado– para participar, buscando y recibiendo apoyos internacionales, del III Foro Social Mundial que se realizó en la ciudad de Porto Alegre, Brasil.

Por último, en América del Sur, en relación a la protesta social, se destacan aquellas protagonizadas los movimientos sociales de base territorial. Los “sin” o “excluidos” producen una vez más las confrontaciones políticas más significativas de la dinámica regional. Esta proliferación de movimientos que se constituyen en clave de su carencia (los “sin”) expresa una de las paradigmáticas secuelas de la debacle social que supuso el neoliberalismo en la región. En Paraguay, los sin techo de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares-Movimiento Sin Techo (CONOP-MST) cierran rutas contra el recorte de fondos destinados a la adquisición de tierras. En Brasil, el Movimiento Sin Tierra (MST) realiza ocupaciones de haciendas en diferentes regiones del país con el objetivo de presionar al gobierno federal en pos de sus reivindicaciones, siendo ésta la primera acción efectuada por el MST desde la asunción del gobierno de Lula. Por otra parte el gobierno federal da a conocer que no va a rever la medida provisoria que considera delito las ocupaciones de tierra y que retira del programa de reforma agraria a las tierras que sean ocupadas por un plazo de dos años.

En Argentina se destacan las luchas encabezadas por los diferentes movimientos de trabajadores desocupados o piqueteros, que significaron más del 53% de las protestas de los asalariados en su conjunto durante el cuatrimestre. Y finalmente, en Uruguay, si bien los hechos de conflicto registrados bajan el 38% respecto del cuatrimestre anterior, se destacan las movilizaciones de la Federación Uruguaya de Vivienda por Ayuda Mutua

(FUCVAM) en reclamo de que el dinero del Fondo Nacional de Vivienda sea destinado a la construcción de las mismas. En este marco, la organización realiza en enero una marcha de tres días de Montevideo a Punta del Este, donde se les prohíbe el acceso y los 169 militantes que encabezaban la movilización son detenidos por unas horas.

El movimiento de “resistencia global” en América Latina Del Foro Social de Porto Alegre a la lucha contra la guerra

Los atentados del 11 de septiembre se volvieron inigualables argumentos para presentificar hasta las más impenetrables geografías, la posibilidad permanente de una guerra constante y de un poder “omnipresente” que el mismo presidente Bush presentó en sociedad con el nombre de “guerra infinita”. Luego de la invasión de EE.UU. a Afganistán, e instalada la propaganda mediática que sus propios monopolios de la información construyeron sobre supuestas “armas de destrucción masiva”, los pueblos del mundo fueron conscientes de la estrategia imperial en pos de apoderarse de los recursos naturales de Irak y supieron prever el inevitable espanto de la guerra.

A pesar de la tragedia en curso, la propaganda, el lobby y finalmente la ruptura de la legalidad internacional –cuando las potencias agresoras deciden la invasión militar sin autorización del consejo de seguridad de las Naciones Unidas– el movimiento social global potenció al máximo sus redes políticas y organizativas hasta alcanzar el grito más fuerte y unitario que se haya dado jamás, pronunciando en cientos de idiomas un conmovedor “No a la Guerra”. El 15 de febrero de 2003 es ya un día histórico para las luchas sociales de la “era global” por ser la primera jornada en que los pueblos del mundo realizan una protesta de tamaño envergadura internacional y multicultural en la cual participan millones de seres humanos de los cinco continentes.

Por otra parte, este día de “acción global” reconoce una organización coordinada y se siente parte de un mismo proceso de lucha que se expande en un tiempo record a partir de la convocatoria a “parar la guerra” surgida del Foro Social Europeo en Florencia en noviembre de 2002 –y retomada por los movimientos del mundo en Porto Alegre– para en sólo dos meses producir esta inigualable movilización de la humanidad contra la barbarie.

Este tipo de manifestaciones vinculadas directamente con la problemática internacional –o bien promovidas por organizaciones que integran “el movimiento de movimientos” de resistencia global– no son nuevas en América Latina y se han venido incrementando fundamentalmente en los últimos tres años en relación con la experiencia del FSM de Porto Alegre y la coordinación de las acciones regionales para la lucha contra el ALCA. Sin embargo, en el primer cuatrimestre del año, y como resultado de la potenciación de la participación de los dife-

rentes sectores sociales para manifestarse contra la guerra de Irak, este tipo de protesta tiene un crecimiento muy significativo en la región, pasando de representar el 0,7% sobre el total de registros en el último cuatrimestre de 2002 al 7,8% para el primero de 2003.

Impulsan estas luchas organizaciones sociales indígenas, sindicales, defensores de derechos humanos, campesin@s, mujeres, ecologistas, partidos de izquierda, etc. También juegan un rol destacado en la producción de estas amplias coaliciones las movilizaciones promovidas por diferentes iglesias y grupos ecuménicos que organizan vigiliyas y oraciones por la paz, conformando significativos momentos de participación en clave de amplísimos colectivos que podríamos situar desde el pacifismo al antiimperialismo, y que en muchos casos nacionales confrontan con la política de los gobiernos o bien logran condicionar sus posiciones. En decenas de ciudades latinoamericanas tenemos registro de la manifestación del 15 de febrero, fecha que marca el inicio de este importante movimiento en América Latina. Ese día se realizan significativas movilizaciones en Tegucigalpa, Panamá, Managua, Lima, Quito, Buenos Aires, Puerto Rico, Montevideo, Caracas, San Pablo, México DF, entre otras ciudades, que se dirigen en la mayoría de los casos a las embajadas norteamericanas y culminan, en algunos de ellos, bajo la represión policial.

Confrontados con estas manifestaciones, los posicionamientos de los diferentes gobiernos de la región son disímiles. En el caso de Honduras, Costa Rica, Colombia, El Salvador y Nicaragua éstos expresan su conformidad con la invasión norteamericana e incluso algunos de ellos (Honduras, El Salvador y Nicaragua) ofrecen enviar personal militar a la zona del conflicto.

En este sentido, en Costa Rica, luego del anuncio gubernamental a favor de la guerra, las protestas, además de ser en contra del conflicto bélico, son también en contra de la posición oficial del país y en demanda de la renuncia del canciller. En Nicaragua las protestas obtienen una mayor repercusión, organización y capacidad de convocatoria, ya que se realizan también en rechazo a la política del presidente Bolaños, que apoya el ataque militar. Por otra parte, El Salvador es uno de los casos donde estas movilizaciones se articulan con las marchas contra el Tratado de Libre Comercio entre EE.UU. y Centroamérica, y donde los trabajadores de la salud incorporan también reivindicaciones propias del conflicto por el que atraviesan. En otro sentido, el impacto político de las marchas explica quizás la reticencia de algunos gobiernos latinoamericanos a alinearse con la política norteamericana: tal el caso por ejemplo de México y Chile.

Si bien este movimiento tiene gran vitalidad y variadas expresiones durante este período, se encuentra ahora ante el desafío de sostener la movilización y articular la protesta en relación a la ampliación del escenario de militarización social que afecta a la propia región latinoamericana.

El territorio latinoamericano y otras “guerras” posibles Militarización social y tropas de los EE.UU. en la región

En los números anteriores del *OSAL* hemos señalado el significativo aumento de la militarización social en la región, en especial con posterioridad a los sucesos del 11 de septiembre. En un escenario internacional que se inclina por la solución armada de los conflictos, problemáticas como la colombiana animan los espíritus de quienes desean una salida de tipo quirúrgico o de descabezamiento, como se denominaron algunas de las operaciones bélicas que los EE.UU. promovieron en Irak para la pantalla global.

En esta línea se inscribe la solicitud concreta del presidente de Colombia, Álvaro Uribe, de que los EE.UU. encabecen una intervención militar de similar tipo en su país. Por otra parte esta tendencia se articula con la estrategia norteamericana que, anclada en el conflicto armado colombiano, pretende homogeneizar bajo similares parámetros inscriptos en la “lucha contra el terrorismo” la totalidad del conflicto social en la región andina. Desde esta perspectiva, “esta guerra” no busca legitimarse ya tras las denuncias de la existencia secreta de “armas químicas o biológicas” sino de “redes narco-terroristas” articuladas con los movimientos indígenas y campesinos que desde hace varios años protagonizan niveles de confrontación política con el modelo hegemónico en la región y se oponen particularmente a la implementación del ALCA.

Esta estrategia cristaliza, en el período considerado, en diferentes reuniones y acuerdos regionales. Así, los jefes de estado de Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Colombia, junto al canciller argentino, firman el 11 de febrero la Declaración de Panamá en la que se cataloga como “terroristas” a las organizaciones armadas colombianas, así como también avanzan en el Acuerdo de Cooperación Policial firmado con Colombia en la reunión de Jefes de Policía de Centroamérica y el Caribe con el compromiso de crear un frente común contra el terrorismo. Por otra parte, en Panamá una misión del ejército estadounidense denominada “Nuevos Horizontes” constituye la primera intervención directa por parte de EE.UU. desde 1993 –cuando ese país finalizó la ocupación de Panamá– y materializa una política de seguridad fronteriza coordinada con el gobierno colombiano. En este sentido leemos también el compromiso del presidente de Ecuador Lucio Gutiérrez de continuar facilitándole a EE.UU. la base de Manta para su “combate contra el narcotráfico” en Colombia. Por último, ya fuera del período que analizamos, la reunión de los Presidentes y Jefes de Estado del Grupo de Río –que convoca a 19 países Latinoamericanos y del Caribe– realizada en Cuzco el 23 y 24 de mayo concluye con una declaración en donde solicitan al secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, impulsar un proceso de paz en Colombia exhortando a los movimientos guerrilleros a deponer las armas.

“En un escenario internacional que se inclina por la solución armada de los conflictos, problemáticas como la colombiana animan los espíritus de quienes desean una salida de tipo quirúrgico o de descabezamiento...”

Los efectos de esta estrategia de poder para la región se combinan también con las políticas de erradicación forzosa de cultivos de hoja de coca que los EE.UU. recomiendan en especial en países como Bolivia y Perú, donde los movimientos campesinos han recuperado en los últimos años importantes niveles de organización social y política e incluso, en el caso de Bolivia, donde un candidato nacido de las entrañas del movimiento cocalero estuvo muy cerca de ganar las elecciones nacionales.

En Bolivia el Congreso aprueba el ingreso de tropas de EE.UU. al territorio para realizar prácticas y tareas humanitarias, mientras que el 16 de febrero el ministro de Defensa anuncia que durante el transcurso del año las fuerzas de seguridad de Bolivia realizarán cursos y entrenamiento antiterrorista dirigidos y financiados por los EE.UU.

En el caso de Perú, tan sólo una semana después de que la Casa Blanca informara que el cultivo de coca se había incrementado un 23% en el último año, es detenido por apología del terrorismo uno de los dirigentes del movimiento cocalero. Sin embargo, ante la relevancia del conflicto, el presidente Toledo accede a reunirse con representantes del movimiento y firma una resolución por la que aprueba, entre otros puntos, la reducción gradual y concertada de las plantaciones de coca. En este contexto, el 7 de marzo EE.UU. reinicia los vuelos para obtener información actualizada de las zonas de cultivo de coca, así como el gobierno autoriza el ingreso de personal del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina de EE.UU., para realizar ejercicios de capacitación y de destreza médica en varias zonas del interior del país.

El incremento de la presencia militar norteamericana en la región se expresa también en el ingreso de Fuerzas Especiales de EE.UU. a Paraguay para realizar ejercicios contraterroristas junto con las Fuerzas Armadas nacionales entre abril y junio de 2003, y en el arribo a República

Dominicana de 200 soldados norteamericanos en el marco de un programa de asistencia a sus Fuerzas Armadas.

Otra forma que asumen la militarización social y la criminalización de las luchas es el aumento del número de muertos en las protestas, como en República Dominicana, donde quienes pedían el abastecimiento de agua potable son salvajemente reprimidos por la policía. Los asesinatos de dirigentes políticos y militantes populares también se incrementan, especialmente en Guatemala, donde son asesinados el ex presidente del Congreso (de la Democracia Cristiana), un juez, una maestra participante de la huelga docente y un sacerdote maya defensor de los derechos humanos y opositor a las ex Patrullas de Autodefensa Civil (ex PAC).

En México el gobierno mantiene la militarización en la zona del conflicto chiapaneco y luego del inicio de la guerra en Irak lanza una nueva operación denominada "Centinela". Hacia mediados de marzo, tras una serie de ocupaciones llevadas a cabo por los zapatistas, aumenta también el número de patrullajes. En Brasil se propaga la creación de milicias armadas al servicio de hacendados que prometen reaccionar con violencia ante cualquier tentativa de ocupación de tierras por parte del MST, en el estado de Paraná. Cabe destacar también que, durante estos meses, varios militantes de este movimiento son asesinados, muchos de ellos en áreas administradas por el INCRA (Instituto de Colonização e Reforma Agrária). Por otra parte, en Argentina, mientras se desenvuelve una campaña electoral poco ligada con las inquietudes políticas de participación social que desplegaron variadas alternativas durante el último año y medio, se producen distintos desalojos no sólo de fábricas recuperadas por sus obreros, sino también de lugares ocupados por otros movimientos sociales, como por ejemplo las asambleas populares, surgidas a partir de las experiencias de autoorganización social que sucedieron a las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001. También se incrementan las amenazas a dirigentes, el encarcelamiento o procesamiento de los mismos y la represión, que tiene su punto de condensación más elevado en la Ciudad de Buenos Aires cuando el desalojo de la fábrica bajo "control obrer@" Brukman.

Frente a este contexto, y con el propósito de delinear alternativas regionales ante los renovados afanes bélicos estadounidenses que marcan las características del escenario con el que se inicia el siglo XXI, representantes de organizaciones y movimientos sociales comprometidos con la construcción de sociedades igualitarias, solidarias, pacíficas y amantes de la diversidad realizan en San Cristóbal de las Casas del 6 al 9 de mayo de 2003 el Iº Encuentro Hemisférico frente a la Militarización (ver sección Documentos en el presente número de la revista).

El ALCA en el recetario neoliberal

La estrategia de EE.UU. para “las Américas”

Durante el primer cuatrimestre del año 2003 las reuniones tendientes a avanzar en los llamados acuerdos de libre comercio (TLC) a nivel regional –que marchan en la perspectiva de la conformación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)– involucran particularmente a los países centroamericanos. Así, en relación a la firma de un tratado entre los Estados Unidos y Centroamérica (El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala y Costa Rica) se suceden tres encuentros (dos en Washington y uno en Costa Rica).

Las reuniones se realizan al calor de un creciente e intenso rechazo social. En relación a estas protestas cabe destacar como una característica del período que entre los sectores que cuestionan las políticas de liberalización arancelaria aparecen, en este caso, grandes y medianos productores agropecuarios que –sin cuestionar globalmente estos acuerdos– se oponen a ciertas condiciones que los mismos suponen y que, en algunos casos, cuentan con el suficiente peso como para lograr que su posición influya en los discursos gubernamentales en las negociaciones con los EE.UU.

En este sentido, sectores económicos privados pertenecientes a las élites dominantes en países como Guatemala y Nicaragua manifiestan su oposición respecto a la política arancelaria de los EE.UU. y la integración comercial, exigiendo mayor información a los gobiernos sobre el estado de las negociaciones, productos y condiciones. En el caso de Guatemala, la CACIF (Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras), órgano que nuclea a las élites locales, critica la actitud proteccionista norteamericana sin cuestionar el acuerdo en general. Por otra parte, en Nicaragua el paquete de propuestas presentado por EE.UU. perjudica a un sector de las industrias locales, particularmente al agro y al textil. En respuesta a ello, el 23 de marzo las empresas privadas nicaragüenses explicitan su demanda de que haya una mayor apertura de parte de los gobiernos de la región en lo que respecta a la información sobre las negociaciones del TLC entre América Central y EE.UU. y piden la exclusión de los lácteos, el frijol y el arroz, lo cual no es aceptado por la contraparte que subsidia a sus productores en esos rubros. Finalmente, el gobierno nicaragüense toma posición en defensa de la protección de la agricultura centroamericana en una reunión con su par norteamericano que se realiza el 10 de marzo.

En Honduras, el denominado Bloque Popular² realiza una protesta para exigir al gobierno una explicación sobre las negociaciones, al tiempo que los productores de arroz, leche, carne de cerdo y de pollo y la asociación de procesadores de embutidos le comunican al gobierno que no seguirán participando de las mismas por la imposibilidad de competir con las prebendas y subsidios que aplica EE.UU. a sus productores.

Por otra parte, en ocasión de la reunión realizada en San José de Costa Rica para avanzar en el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Centroamérica y EE.UU. se producen grandes manifestaciones. En el marco de estas protestas, los trabajadores demandan el retiro de la industria de telecomunicaciones de las negociaciones, y defienden el monopolio estatal en dicho sector y en el agua potable y la seguridad social. Al mismo tiempo, la Unión Nacional de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios marcha en demanda de que sus productos queden excluidos del TLC.

Finalmente en El Salvador las manifestaciones expresan altos niveles de confrontación política, movilizándose en forma conjunta trabajadores, estudiantes, empleados públicos y campesinos que repudian los TLC, el ALCA, el Plan Puebla-Panamá y la continuidad de las políticas neoliberales. Estas movilizaciones se realizan contra el segundo encuentro de la Comisión Ejecutiva del Plan Puebla-Panamá, que tiene lugar en la ciudad de Colón entre el 20 y 21 de marzo.

En México, a fines del año 2002 una coalición social formada por pequeños y medianos productores del campo así como también por una parte del movimiento campesino-indígena organiza sus luchas al grito de "El campo no aguanta más" (véase el artículo de Armando Bartra en el presente *OSAL*). Este movimiento asume como reivindicación la revisión de contratos del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), imprimiéndole al conflicto una gran relevancia política nacional e internacional.

Este cuestionamiento al sistema de reglas de este TLC, el primero que entró en funcionamiento en la región el 1º de enero de 1994 y frente al cual se inicia el levantamiento del EZLN en Chiapas, visibiliza las condiciones desfavorables de intercambio que para la economía mexicana y en particular para la producción agropecuaria supone esta desigual apertura. El gobierno abre un período de negociación en el que incluye a los organismos del sector empresarial y a frentes de organizaciones campesinas y de pequeños propietarios –El Campo no Aguanta Más, el Consejo Agrario Permanente, El Barzón y la Confederación Nacional Campesina. La estrategia del gobierno, que se revela exitosa, consiste en el ofrecimiento de subsidios a proyectos productivos y compromisos de restricción a la importación de semillas básicas –maíz blanco, frijol y otras– logrando que la gran mayoría de las organizaciones abandone la pretensión inicial de revisar el TLCAN.

Por otra parte, los movimientos sociales brasileños exigen al nuevo gobierno el reconocimiento de la consulta popular donde más de diez millones de personas se pronunciaron contra el ALCA. En la misma dirección, las coordinaciones regionales y continentales continúan con las actividades de la campaña *No al ALCA* a lo largo y ancho de toda la región latinoamericana, intentando avanzar en la divulgación y la educación popular sobre los efectos sociales que implica dicho acuerdo. Estas campañas promueven fun-

damentalmente la realización de plebiscitos en cada uno de los países que permitan desarrollar estrategias comunes de intervención por parte de los pueblos que se verían afectados por el ALCA, al tiempo que articulan la oposición en base a los principales puntos de convergencia.

Enfrentar este proceso requerirá en primer lugar de la existencia de una importante resistencia social, pero también del desarrollo de reales estrategias políticas alternativas capaces de confrontar de manera exitosa con el rumbo económico sintetizado en el ALCA pero efectivizado mediante la militarización social y la presión constante de la deuda externa que EE.UU. ha trazado para América Latina en esta "nueva etapa" de una vieja historia de subordinación política y explotación económica.

Bibliografía

Bensaïd, Daniel 2003 "La guerra tendrá lugar", en *Cuadernos del Sur* (Buenos Aires) N° 35, Mayo.

Cronologías ampliadas enero-abril 2003 e informe cuatrimestral por país sobre el conflicto social elaborado por el equipo del OSAL.

Sader, Emir 2003 "¿Érase una vez el neoliberalismo?", en *Página 12* (Buenos Aires) 11 de junio, contratapa.

Seoane, José y Taddei, Emilio 2003 "Movimientos sociales, conflicto y cambios políticos en América Latina", en *OSAL* (Buenos Aires) N° 9, Enero.

Notas

1 Agradezco muy especialmente las discusiones, comentarios y sugerencias realizados por José Seoane y Emilio Taddei durante la escritura de estas líneas, así como la dedicada lectura de Ivana Brighenti. También es importante mencionar y agradecer al equipo del OSAL por la realización de los informes cuatrimestrales de cada uno de los 19 países que han sido una gran ayuda a la hora de trazar las líneas principales de análisis sobre lo acontecido en la región en este primer cuatrimestre del año 2003 y han posibilitando que este trabajo sea realmente una breve caracterización colectiva.

2 El Bloque Popular está integrado por la Federación Central de Sindicatos de Trabajadores Libres, la Federación Unitaria de Trabajadores, el Comité de Defensa del Consumidor y diversas organizaciones estudiantiles y de maestros, que agrupan alrededor de 500 mil afiliados.